

próximo pasado, absolvió del cargo á los acusados, cuya determinación, el 13 del mes actual, fué confirmada por el Tribunal de Circuito de Querétaro.

No encontrando el que suscribe mérito para exigir la responsabilidad á los jueces que intervinieron en esta causa, pide á esta 1.^a Sala se suya así declararlo, y dar por revisada dicha causa.

México, 12 de Abril de 1874.—*García Ramírez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, 10 de Abril de 1874.—Por revisado, y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvase las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan José de la Garza.—Ignacio Altamirano.—Simon Guzman.—Enrique Landa, secretario.*

Es copia que certifico. México, 30 de Abril de 1874.—*Alejo Gomez Eguarte, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por el C. Julian Montiel y Duarte, en representacion de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Pío Bermejillo, D. Joaquin Garcia Icazbalceta Hermanos y D. Jose T. Guerra, contra la ley de Hacienda del mismo Estado de 12 Octubre de 1873.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, dice: que el C. Julian Montiel y Duarte apoderado sustituto

de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Pío Bermejillo, D. José T. Guerra y D. Joaquin Garcia Icazbalceta Hermanos, se ha presentado en este Juzgado de Distrito, promoviendo un recurso de amparo contra la ley de Hacienda expedida para el Estado en 12 de Octubre de 1873, pidiendo que desde luego se decreta la suspension del cobro de las cuotas que con arreglo á esa ley se han asignado á sus poderdantes. Pido á la Direccion general de rentas y á la Legislatura del Estado, el informe á que se refiere el artículo 52 de la ley de 20 de Enero de 1869, esas autoridades, por sus oficios de fecha 21, vienen aduciendo razones que en su concepto fundan la improcedencia del amparo y la violacion de la Soberanía del Estado, con la admision del recurso, por ser incompetente el Juzgado de Distrito para calificar la legitimidad de sus autoridades, y por estar prohibido á los extranjeros toda ingerencia en los asuntos políticos del país. Esas razones se manifiestan además con el carácter de deferente concecion á la autoridad que representa este Juzgado de Distrito, y tanto el C. Director como la II. Legislatura, creen que no estan en la obligacion de informar, por que no son las autoridades inmediatamente encargadas de ejecutar el acto reclamado. Los informes de la autoridad ejecutora, en los recursos de amparo, están establecidos como el medio concedido á esas autoridades para defender la legitimidad de sus actos, y pueden siempre que quieran, omitirlos, aunque están en estricta obligacion de ministrar al Juzgado de Distrito los datos que estime necesarios para la resolcion de las controversias que somete á su jurisdiccion el artículo 101 de la Constitucion de la República. Es notorio que la Legislatura no es en efecto la autoridad que ejecuta el acto reclamado; pero siendo tambien incontestable que los recaudadores de rentas, poco y ningun conocimiento deben tener de las circunstancias con que fueron dictadas las

resoluciones de la Legislatura y de los actos que esta misma ejecutó, el Juzgado le pidió también su informe, como el medio de que defendiera esos actos, haciéndole mas bien una concesion, con ánimo de proceder con mejor acierto, que imponiéndole una exigencia caprichosa; y respecto del Director de rentas, el Juzgado tuvo presente que por el acuerdo de ese funcionario, se hacen las cuotizaciones de impuestos por los Administradores de rentas en los Distritos. Sin embargo, en esos informes se cuidó de negar los hechos en que el actor apoya su queja, ó mas bien, la ilegitimidad del acto reclamado, repitiendo que el Congreso del Estado ha sido el único competente para declarar la eleccion del Gobernador y la de los diputados que forman aquella asamblea.

La queja en efecto, se funda en que la ley reclamada como anticonstitucional, fué votada por un número de diputados incompetente para formar *quorum* en la Legislatura, y promulgada por por un Gobernador ilegítimo, y con su ejecucion se viola por consiguiente, la garantía que otorga el artículo 16 del pacto federal. El artículo 101 del mismo Código, establece que los Tribunales federales resolverán en toda controversia que se suscite por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales; y el artículo 39 de la ley de 20 de Enero de 1869, orgánica de ese precepto constitucional, determina que es Juez de 1ª instancia en esas controversias, el de Distrito de la demarcacion en que se ejecute ó trate de ejecutarse la ley ó acto que se reclame. Este Juzgado es pues, competente para investigar si las autoridades del Estado son ó no legítimas, siempre que al ejercer estas las funciones que se dicen usurpadas, ó con la misma usurpacion puedan violar las garantías individuales, y haya persona que se queje de esa violacion.

Es verdad que el artículo 25 de la ley de 20 de Enero ya citada, establece, que es causa de responsabilidad la admission ó no admission del recurso; pero V. hubiera obra-

do impremeditadamente, desechando este desde luego, y en nada se vulnera ni menos-caba la soberanía del Estado con la sustanciacion del recurso; y por otra parte, admitir de una manera tan lata la soberanía de los Estados, y reconocer que fuera indiscutible la legitimidad de las que se dicen sus autoridades, seria infringir la misma Constitucion de la República, que establece para esos Estados determinada forma de Gobierno, y equivaldría á sacrificar el fin de las instituciones, que son los derechos del hombre, al medio que es el sistema político, como muy bien ha declarado la Suprema Corte de Justicia en una de sus resoluciones análogas. Ademas: si bien los extranjeros no deben ingerirse en las cuestiones políticas, no es menos respetable en ellos la propiedad y los demas derechos del hombre, que en los ciudadanos de la República, y las garantías individuales son el reconocimiento de esos derechos inalienables mas bien que concesion exclusiva hecha á los mexicanos.

Por esas razones, el Juzgado no ha desechado ni debe desechar el recurso, y dispuesto á conceder el amparo, en el caso de que proceda, mandó correr traslado al que suscribe, para que pida sobre el punto de suspension.

El artículo 69 de la ley orgánica repetida, previene que se podrá dictar la suspension, siempre que el acto reclamado esté comprendido en alguno de los casos de que habla el artículo 19, que es el 101 de la Constitucion, y la suspension inmediata, es el remedio establecido para evitar que durante la sustanciacion del recurso se irroguen graves ó irreparables perjuicios al quejoso, ó se impida la resolucion, por que mientras tanto quede irremisiblemente consumado aquel acto. En nuestro caso, los quejosos, segun las cuotizaciones que adjuntaron á su escrito y que admite como ciertas el director de rentas, tienen que pagar mensualmente \$5787 87 cs, entre todos, y el primer entero debieran hacerlo

antes del día 10 del próximo Enero. Ese pago, si es indebido, es tambien un verdadero perjuicio; y aunque el C. director ha sostenido en otra ocasion, que los daños que pueden resolverse en dinero son reparables, en nuestro caso deben agregarse al daño las molestias del procedimiento económico-coactivo, que indudablemente se emplearía, puesto que ya desde ahora resisten el pago los quejosos; el erario del Estado no quedaria obligado al resarcimiento por actos de autoridades ilegítimas, y la concesion del amparo no traeria consigo la declaracion de ese resarcimiento, puesto que sus efectos se limitan á impedir la comision de los actos anticonstitucionales.

Este recurso no habrá probablemente concluido, ni podia esperarse la resolucion definitiva de la Corte de Justicia, antes del 10 de Enero; y siendo por otra parte menores los perjuicios que resultarán al Estado por la demora de poca duracion en el pago de esos impuestos, que el mismo C. director dice que son los que corresponden á un número insignificante de los causantes.

El promotor pide, que de conformidad con la peticion de los quejosos, y con arreglo al artículo 6º de la ley de 20 de Enero tantas veces citada, se mande suspender el cobro de las contribuciones impuestas á los quejosos en virtud de la ley que se reclama.

Cuernavaca, Diciembre 23 de 1873.—
Nicolas Medina.—Una rúbrica.

2º *Pedimento fiscal.*

C. Juez de Distrito

El Promotor fiscal dice: que como en todas las confederaciones, en la República Mexicana los Estados que la forman, tienen solo restringida su soberanía por las prescripciones del pacto federal (art. 177 de la Constitucion), pero establecidas esas restricciones, la soberanía se ejerce por los poderes de la Union, en los casos de su com-

petencia, conforme á la Constitucion federal, y por los de los Estados en lo que toca á su régimen interior, segun las constituciones particulares de los mismos, que jamás pueden contravenir las estipulaciones del pacto federal (art. 41 de la misma).

Entre nosotros, el pacto federal garantiza ademas para los Estados, la forma de gobierno republicano representativo popular (art. 109 de idem), y como salvaguardia de las garantías individuales y de los límites que separan la órbita de las atribuciones de las autoridades federales, y la soberanía de los Estados, bases fundamentales del sistema á que ninguna autoridad puede atentar, ni puede subvertir ley alguna, están sujetas á la decision de los tribunales federales las controversias que se susciten por violaciones de la Constitucion en cualquiera de esas maneras, y los tribunales federales están encargados así, de cuidar de la observancia de la Constitucion que es la suprema ley de la República (art. 101 y 102).

Sin embargo, establecido por el art. 40 del mismo pacto federal, que la República se compone de Estados libres y soberanos, por lo que toca á su régimen interior, se presenta como un óbice para el juicio de los tribunales federales, y como ajenas de su competencia, las cuestiones sobre legitimidad de las autoridades de los Estados, que se dicen intimamente conexas con su soberanía y fuera del poder de la Federacion que no puede invadir esa misma soberanía. Pero el mismo artículo constitucional agrega, que esos Estados libres y soberanos están unidos en una federacion establecida, segun los principios establecidos por la ley fundamental, y es inconcuso que no habia posibilidad de liga ó union entre esas entidades, si faltara un poder que cuidase de la observancia del pacto federal, ó impidiese á todos los poderes de la República que atentaran á las prohibiciones de ese pacto ó extralimitaran las restricciones que él impuso á todas las autoridades de la Federacion.

Entre las garantías individuales otorgadas al hombre, por solo su calidad de tal, en nuestra Constitución federal se encuentra la del art. 16 que establece: "Nadie puede ser molestado en sus posesiones &c. sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento," y sería apartarse del ánimo manifiesto de nuestros legisladores constituyentes y nulificar ó restringir esa garantía hasta sus últimos límites, si la incompetencia hubiera de decidirse solo en atención á las facultades atribuidas al cargo de que se dijera depositaria la autoridad que infringiese cualquiera de las molestias á que se refiere el artículo citado. Esa prevención constitucional al expresar *autoridad*, se refirió á cualquiera que teniendo los recursos ó medios de hecho para llevar á cabo el cumplimiento de sus determinaciones, pudiese molestar á los individuos en sus personas, posesiones, familias ó intereses; y al exigir que tal autoridad fuese competente, es indudable que quiso comprender no solo las facultades que competieran al puesto que ocupara entre los depositarios del poder público en cualquiera de sus ramos, sino también la legitimidad con que ejerciera ese poder, y á los requisitos que son indispensables en el individuo que se dice su depositario.

Efectivamente, no es ni puede considerarse competente la autoridad de hecho, el usurpador del poder público, ni los individuos incapaces para ejercerlo; y si por incompetente puede reclamarse la molestia de cualquiera autoridad que extralimite las atribuciones de su cargo, con mayor razón y por el mismo precepto constitucional debe ampararse por la justicia federal á cualquiera individuo que sea molestado por la autoridad de hecho que no haya recibido comisión ni pueda considerarse depositaria de la soberanía del pueblo para el ejercicio del poder público en cualquiera de los Estados.

Si por competencia se entiende la facultad

TOMO VI.—PARTE II.

de dictar órdenes sobre materia determinada, ó la extensión del poder para llevar á cabo determinadas prescripciones, la incapacidad absoluta para ejercer ese poder ó la inhabilidad para toda especie de facultades, dan el mismo resultado respecto caso particular; y como el art. 16 de la Constitución no distingue la manera de incompetencia, es claro que comprendió tanto la absoluta por la ilegitimidad de los funcionarios, como la que solo se refiere á la restricción de sus facultades. La prescripción constitucional que venimos examinando, no importaría el establecimiento de una de las bases del sistema, ni reconocería tampoco uno de los derechos inalienables de los individuos, si absolutamente independientes los Estados y pudiendo atribuir á sus funcionarios toda especie de facultades, se restringiera ese precepto al sólo examen de si conforme á las leyes de los Estados las facultades de sus autoridades se extendieran ó no á ingerirse, ó ejercer el poder público en cada caso, según su naturaleza. La misma Constitución reconoce que todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio (art. 39); y no habría en el país forma de gobierno asegurada, ni derechos individuales establecidos, si la soberanía ó independencia de los Estados impedirían examinar la legitimidad de sus autoridades, y la delegación que pretenden tener de la soberanía del pueblo. Si así fuese, podría igualmente variarse la forma de gobierno establecida para los Estados por el pacto federal, y lo mismo obstaría examinar para declaración de anticonstitucional el sistema de gobierno adoptado por alguno, que no fuese republicano ni popular, que decidir sobre la usurpación del poder público de un Estado, cuando las autoridades falseen ó burlen el sistema representativo (art. 109).

Ahora bien, conforme al art. 19 de nuestra Constitución, los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, y el pueblo mexicano reconoce como principal fundamento de nuestro siste-

ma de gobierno, que todas las leyes y todas las autoridades, deben sostener y respetar las garantías que otorga esa misma Constitución; y si una de esas garantías consiste en impedir las molestias que pudieran inferir á los individuos las autoridades de hecho, los usurpadores del poder público, ó las autoridades de cualquiera manera incompetentes, es inquestionable que no se restringe ni ataca la soberanía de los Estados, en los términos que la establece el pacto federal, el conocimiento y decisión de los tribunales federales en las cuestiones sobre la legitimidad con que sus autoridades ejercen el poder público, ó sobre la estension que den al poder de que son depositarios, en el caso de que un individuo cualquiera que sea, invoque la garantía que le asegura el art. 16 de la misma Constitución. De admitirse lo contrario, resultaría que los tribunales federales, guardianes de la Constitución y defensores del sistema, tuvieran que permanecer impasibles, en el caso de que un círculo cualquiera usurpara los poderes de un Estado y los ejerciera, no para beneficio sino para la escandalosa depredación del pueblo que lo forma; y así, el objeto principal de las instituciones constitucionales, que son los derechos del hombre, quedaría pospuesto y se sacrificaría al sistema que no es sino el medio de alcanzar ese objeto. La soberanía de los Estados no se restringe sino antes bien se considera en los términos del pacto federal, conque se admita, sustancie ó resuelva un recurso de amparo que se funde ó motive en la ilegitimidad con que se ejerza el poder público por individuos que lo hayan usurpado, ó que extralimiten sus atribuciones.

En nuestro caso, los ciudadanos españoles D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Joaquin Garcia Icazbalceta Hermanos, D. Pio Bermujillo y D. José Toriello Guerra, propietarios de fincas rusticas en el Estado, reclaman como anti-constitucional la ejecución de la ley de Hacienda expedida por la Legislatura en 12

de Octubre de 1873, y solicitan de la justicia de la Union que los ampare y proteja contra ella en el goce de la garantía que otorga el art. 16 de la Constitución de la República. Fundan su petición, en que la mencionada ley fué expedida por una reunion de diputados insuficiente para formar *quorum* en la Legislatura del Estado, puesto que de los seis que concurrieron á su expedición, el C. Vicente Llanas no debe considerarse diputado, por que su elección en el Distrito donde era Gefe político, es nula conforme á la fraccion IV del art. 33 de la Constitución particular del Estado, y porque las leyes para ser obedecidas, necesitan estar promulgadas por el poder ejecutivo, y el C. Francisco Leyva que promulgó esa ley, no es Gobernador legítimo, porque no podía ser reelecto conforme á la primitiva Constitución del Estado, que no ha sido reformada en los términos que ella misma establecía, y aun segun la reforma que de ella se hizo, no reunió en la nueva elección el voto de las dos terceras partes del Estado. Pedido el informe de ley á la Legislatura del Estado y al C. Director de rentas, objetaron desde luego que por no ser las autoridades inmediatamente encargadas de ejecutar la ley que se reclama, no estan obligadas á informar; y para quitar en todo caso la duda de que se restringiera para las autoridades del Estado el derecho que les concede la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, para defender sus actos reclamados en los juicios de amparo, el que suscribe cree necesario advertir desde luego, que ese derecho ha sido ampliamente reconocido y asentado por el Juzgado de Distrito, y no debió pedirse informe á los Administradores de rentas de los Distritos en que están ubicadas las propiedades de los quejosos, como se pretendía, con el objeto quizá de de entorpecer la acción de este recurso, con la demora indispensable de tener que ocurrir á puntos lejanos de su residencia. Se pidió informe á la Legislatura, porque solo ella podía informar sobre las

circunstancias con que se discutió y aprobó la ley reclamada, porque ella únicamente conserva los datos y computación de votos de la elección de Gobernador, que como se dice en el escrito de queja, no han sido publicados, y porque fuera de esa asamblea nadie podía informar sobre las circunstancias ó fundamentos porque se aprobó la credencial del C. Llunas, y declaró Gobernador al C. Leyva. El Juzgado de Distrito pudo, si hubiera querido, pasarse sin oír á la Legislatura; pero procedió con justicia y obrando acertadamente oír sus defensas para su mejor conocimiento. Respecto del Director general de rentas, es en el Estado el superior inmediato de los administradores y recaudadores de rentas de los Distritos, quienes obran en todos los casos bajo sus órdenes, y mas bien como sus agentes particulares, que como funcionarios independientes, puesto que ni aun tienen sueldo establecido, gozan solo como honorarios de un tanto por ciento de lo que recaudan, consultan y reciben órdenes inmediatamente del Director, y la mejor prueba de que acatan las instrucciones de este funcionario y no son independientes ejecutores de la ley, es que como anuncia en la parte final de su informe con justificación (fejas 40), les dictará las medidas necesarias para que en cumplimiento del auto de suspensión, no surta sus efectos la ley de 12 de Octubre, respecto de los quejosos. Además, como dije en mi anterior pedimento, los ciudadanos Administradores, poco ó nada podrian informar sobre las circunstancias en que se apoya el amparo.

Tanto la Legislatura como el Director de rentas, emitieron no obstante, sus informes, primero, con calidad de defensas á este Juzgado, y despues como defensa de los inalienables derechos de soberanía é independencia del Estado. En ellos se pretende, que este Juzgado ha obrado anticonstitucionalmente dando entrada á este recurso de amparo, por que estando la legitimidad de los funcionarios públicos íntimamente

conexa con la independencia y soberanía de los Estados, que en su régimen interior no tienen superior, ha violado el artículo 40 del Pacto federal, sin que la prescripción del artículo 16 lo autorice para ello, puesto que son distintas la legitimidad y la competencia y pueden existir independientemente; pero he creído fundar ya que son incompetentes todas las autoridades ilegítimas, y la ilegitimidad como incompetencia de origen está comprendida en el artículo 16 de la Constitución, sin que la soberanía de los Estados se entienda ni pueda entenderse, hasta impedir la ingerencia de los tribunales federales, guardianes de la Constitución, en los casos de usurpación del poder público de un Estado.

Los poderes federales no podrán nombrar ni sustituir á la autoridad de los Estados; no podrán ingerirse en su nombramiento ni quitar directamente á los ilegítimos existentes; pero sí tienen el incuestionable deber de proteger á los individuos contra los que subvierten la soberanía popular y contrarios que de hecho ejercen el poder público que no se haya depositado en ellos.

Las autoridades informantes, aducen en defensa de la soberanía del Estado, que malamente creen atacada, las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia en 2 de Diciembre de 1871 y 26 de Marzo de 1873, que se registran en las páginas 488 del tomo 2º y 917 tomo 3º de la parte segunda del Semanario Judicial de la Federación; pero en contra, existen tambien las ejecutorias de la misma Corte de 18 de Julio, 19 de Octubre y 14 de Noviembre de 1872, que se registran en las páginas 155, 397 y 482 del tomo 3º del mismo Semanario. Analizando los fundamentos de esas ejecutorias y los diversos casos sobre que recaeron, puede desvanecerse su aparente contradicción y todas ellas concurren á fundar mejor la opinión que antes he manifestado.

Sé alega tambien, que quedaria destruida la division de los poderes, si el Juzgado de

Distrito calificara las elecciones de los CC. Leyva y Llamas, que incumbe exclusivamente á la Legislatura del Estado; pero el Juzgado de Distrito, que no hará tal calificación ni declaración general alguna respecto del acto que motiva el amparo, según el artículo 102 de la Constitución, y se limitará á juzgar la inconstitucionalidad de ese acto, que como los de cualquiera autoridad están bajo ese aspecto sujetos á su examen, para solo amparar á individuos particulares, no extralimitará sus facultades judiciales, sino antes bien ejercerá la mas importante que le concede el artículo 101 de la Constitución federal.

De la misma manera se contesta la objeción que pretende fundarse en el artículo 117 del mismo Código; pues aun cuando esté reservada á los Estados la facultad de calificar la validez ó nulidad de las elecciones de sus autoridades y resolver las dudas que sobre ellas ocurran, esa facultad como todas, se entiende y debe entenderse en cuanto no pugne con las garantías individuales que todas las autoridades deben respetar, y ademas, en caso de conceder este amparo, el Juzgado de Distrito no la ejercerá y cuando mas habrá impedido que se suplante y atente al voto popular, solo en lo relativo al agravio que se haya causado á los quejosos, sin que por ello haga ninguna declaración general respecto del acto que se reclama.

Los extranjeros, como todos los individuos, tienen es verdad, la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera equitativa establecida por la ley; pero gozan tambien de las garantías individuales, y siempre que la ley en virtud de la que se les exija el pago de las contribuciones no emane de una autoridad competente, no tenga los requisitos establecidos por la Constitución, ó se ejecute por una autoridad ilegítima, la Justicia de la Union puede y debe ampararlos individualmente. Pero la obligación de contribuir á los gastos públicos no puede entenderse la de estar

sujetos á las exacciones de las autoridades de hecho ó de los usurpadores del poder, sin que pudieran buscar la protección de la Justicia federal, por la prohibición de mezclarse en las cuestiones políticas.

Será ó no ilegítimo el propósito de derrocar un Gobierno en el Estado de que no son ciudadanos; pero ese objeto secundario no está ni puede estar manifestado para el Juzgado de Distrito, mientras solo se le pida protección contra las violaciones de una garantía individual, y los tribunales federales cumplirán con su alta y noble misión de proteger los derechos individuales evitando su violación, sin atender á los inconvenientes que para cualquiera autoridad traiga esa protección. El C. Director de rentas agrega, que por el hecho de entablar este recurso los quejosos, reconocen como legítimas á las autoridades que expidieron y ejecutan el decreto reclamado; pero al expresar el artículo 101 de la Constitución, *los actos de cualquiera autoridad*, entiende no solo las autoridades legítimas, sino cualquiera que con los recursos de tales, violen ó puedan violar las garantías individuales, y se refiere á los que se digan autoridades aun cuando no lo sean para determinado caso, ó de una manera general.

Tanto la Legislatura del Estado como el C. Director de rentas, se limitaron á informar sobre la cuestión de procedencia del amparo, bajo el aspecto de ataque á la soberanía del Estado y violación de la garantía invocada, exponiendo solo consideraciones legales sin entrar en la cuestión de hechos. Como estrafio á la decisión de este recurso, yo excusaré hacer apreciaciones del camino emprendido por la Legislatura, que se apresura á acusar á V. sin esperar la revisión que de sus actos hará el superior, y busca desde ahora el apoyo de los demás Estados contra la resolución de los tribunales federales en el caso de la concesión del amparo.

Creo por las razones mala y precipitadamente expuestas, que sustanciando este re-

curso y concediendo el amparo en el caso de que se pruebe la violacion de la garantía invocada, el Juzgado de Distrito cumplirá con su alta y honrosa misión sin que sea instrumento servil de intereses que en nada le atañen, sino antes bien ojeador de la ley y guardian de las instituciones; pero las autoridades informantes, que se niegan á tocar como antes dije, las cuestiones de hecho, indican ellas mismas que este juicio debe recibirse á prueba, y en efecto, el Juzgado en la Suprema Corte de Justicia podrán resolver con pleno conocimiento mientras no se hayan esclarecido los hechos en que se funda la queja, que por su parte los peticionarios tambien han ofrecido probar. Fijados los hechos, podria analizarse la ilegalidad del acto reclamado, y podrá decidirse realmente si se viola ó no la garantía invocada. Por lo que y reservándose allegar y pedir sobre la concesion ó improcedencia del amparo, el Promotor pide, se reciba este negocio á prueba conforme al artículo 10 de la ley de 20 de Enero ya citada.

Otrosí digo: que debe mandarse reponer con el correspondiente, el papel que ocupa este pedimento.

Cuernavaca, 6 de Enero de 1874.—*N. Medina.*

Son copias que certifico. Cuernavaca, 14 de Marzo de 1874.—*Ignacio Alarcelo.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Marzo 13 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Julian Montiel y Duarte en representación de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Pio Bermejillo, D. Joaquin García Icazbalceta Herinanos y D. José T. Guerra, contra la ley de presupuestos del Estado expedida el 12 de Octubre de 1873 próximo pasado. Vistas las pruebas rendidas; lo alegado por el mismo; el pedimento fiscal y todo lo demas que era de verse y ver convino; considerando:

Primero: Que conforme al derecho constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consignado en el art. 61 de la Constitución federal de 1857, uno de los fundamentos generales de las instituciones políticas adoptadas por el pueblo de la República Mexicana, es que el poder legislativo de la Union, no puede ejercer ninguna de sus funciones anexas á su encargo como tal poder legislativo, sin la concurrencia precisa é indispensable de la mitad y uno mas del número total de sus miembros.

Segundo: Que conforme al derecho constitucional propio del Estado de Morelos, igual é idéntica prohibicion está consignada en el artículo 43 de su Constitución particular, respecto de su legislatura, por cuya razon ésta tampoco puede ejercer ninguna de sus funciones, como tal poder legislativo del Estado, sin la precisa é indispensable concurrencia de la mitad y uno mas del número total de sus miembros.

Tercero: Que conforme á los artículos citados y otros que pudieran citarse, una de nuestras mas saludables instituciones, es que cualquiera de los poderes legislativos de la República claudica por falta de *quorum*, no solo cuando materialmente le falta ó está incompleta la mayoría de sus miembros exigida en los artículos mencionados, sino tambien cuando la falta consiste en la forma ó en la legalidad, pues de otro modo la garantía establecida no seria eficaz ni positiva sino ilusoria, puesto que pudiera darse el caso de completarse materialmente la mayoría, pero de una manera anticonstitucional.

Quarto: Que esta manera anticonstitucional de completar materialmente el *quorum* de un poder legislativo cualquiera que sea, se verifica siempre que los diputados que es preciso computar para llegar á formarlos, son considerados como legalmente electos, contra la prohibicion expresa de algun artículo ya de la Constitución federal, ya de la particular de algun Estado.

Quinto: Que esto sucede sin ningun gé-

nero de duda, siempre que los diputados que completan el *quorum* necesario de una legislatura, han sido nombrados diputados contra lo expresamente dispuesto por algun artículo de la Constitucion general ó de la particular de algun Estado, como por ejemplo, cuando son nombrados diputados los Jefes políticos de algun Distrito en el mismo Distrito en que ejerzan jurisdiccion.

Sexto: Que la prohibicion expresa de la eleccion de tales funcionarios en sus respectivos distritos para diputados á la Legislatura de un Estado, existe en el artículo 33 fraccion 4ª de la Constitucion particular del Estado de Morelos, en términos de ser anticonstitucional la eleccion que de un Jefe político se haga en tales circunstancias para diputado á la Legislatura del mismo Estado.

Sétimo: Que concurriendo semejante vicio de anticonstitucionalidad en el nombramiento de todos ó de alguno de los diputados que completan materialmente el *quorum* necesario de una Legislatura, no puede decirse con verdad, ni con razon, ni con justicia, que se reúnen en un caso dado venga á constituir el todo colectivo de la autoridad competente para los efectos del art. 16 de la Constitucion de 1857, pues para ello solo puede ser llamada autoridad constitucionalmente competente, la que haya sido creada ó completada con individuos que formando un número legalmente necesario, estén nombrados en virtud de lo mandado por la Constitucion general de República y por la particular del Estado, y no con individuos que hayan sido electos con violacion de la una ó de la otra Constitucion.

Octavo: Que de las constancias de autos aparece plenamente probado con total arreglo á derecho, con las declaraciones de mas de dos testigos mayores de toda excepcion, que el C. Vicente Llamas fué electo diputado á la Legislatura del Estado por el Distrito de Jonacatepec, cuando era Jefe político del mismo; de donde resulta que

su nombramiento no se hizo en virtud de lo mandado en la Constitucion, sino al contrario, violandola en su mandato expreso y literal.

Noveno: Que de las mismas constancias de autos aparece tambien probado conforme á derecho, que el número total de diputados de la Legislatura del repetido Estado de Morelos, es el de diez; y que por lo mismo, su *quorum* preciso é indispensable es el de seis, para poder funcionar como tal cuerpo legislativo.

Décimo: Que de la prueba rendida por los quejosos, aparece que el C. Vicente Llamas fué uno de los seis diputados que concurrió á completar el *quorum* material de la Legislatura del Estado, con el fin de expedir la ley de hacienda de 12 de Octubre del año próximo pasado, que motiva el presente amparo.

Undécimo: Que por la consideracion expresada de ser anticonstitucional la eleccion del mencionado Jefe político de Jonacatepec, C. Vicente Llamas, resulta que un elemento expulso por anticonstitucional, fué el que vino á completar el *quorum* material de dicha legislatura para expedir la ley tantas veces repetida, sin darle por esto legitimidad ó competencia constitucional en su forma esencial.

Dodécimo: Que por lo que respecta á los actos electorales relativos al C. Gobernador General Francisco Irujo, la Justicia federal no tiene por que entrar al examen de ellos, cualquiera que sean, por otra parte, las irregularidades que se hubieren cometido al ejecutar tal acto; pero sí se ha de tomar en consideracion que la reforma que abrió la puerta á la rediccion no fué hecha conforme á la prevencion del artículo 149 de dicha Constitucion, pues resulta probado en autos por las constancias del Periódico oficial del Estado de los dias 7 de Julio, 19 y 15 de Diciembre de 1871, y 2 y 5 de Enero de 1872, que una sola Legislatura fué la que formuló y aprobó dicha reforma.

Decimotercero: Que por lo mismo de no haber sido reformada en esta parte la primitiva Constitucion del Estado en los términos que establece el art. 149 de la misma, no puede tenerse por constitucionalmente reformada ó modificada la letra del art. 66, que dice: "el Gobernador durará cuatro años en su encargo, y no podrá ser reelecto hasta que haya pasado igual período."

Decimocuarto: Que vigente esta prohibicion para los efectos del art. 16 de la Constitucion general, no puede figurar el General Leyva como autoridad competente para hacer ejecutar la ley que en el caso particular motiva la queja de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, de la Torre, Bermejillo, García, Icazbalceta hermanos, y Guerra, solicitando amparo contra el acto mandado ejecutar para publicar dicha ley.

Decimoquinto: Que por las consideraciones expuestas, resulta, que todo poder público que no dimana constitucionalmente del pueblo, conforme al art. 39 de la Constitucion federal, no es ni puede ser la delegacion constitucional que establece y requiere en los poderes de los Estados el art. 41 de la misma Constitucion federal.

Decimosexto: Que la usurpacion de un poder público en todo ó en parte del personal que lo ejerza, no puede ser obra del Gobierno representativo democrático federal, que establecen los arts. 40 y 109 de la Constitucion federal, y que todas las autoridades del país tienen el deber de respetar y sostener, segun lo ordena el artículo 19 de la misma.

Decimoséptimo: Que esta proteccion tutelar que todas las autoridades de la República deben impartir á todos los habitantes de la misma, para sostener las garantías constitucionales, no se opone á la soberanía de los Estados, que necesariamente reconoce las limitaciones que expresa el pacto federal en los arts. 40 y 41, y otros concordantes.

Decimo octavo: Que una de estas limita-

ciones es, la de que la justicia federal puede hacer la nulificacion de si un acto ó ley, aun cuando sea del regimen interior de los Estados, viola ó no las garantías individuales, pues segun el art. 101 de la Constitucion de 1857, los tribunales de la federacion tienen competencia para resolver toda controversia que se suscite por leyes ó actos de toda autoridad, que violen las garantías constitucionales.

Por todas estas consideraciones de extricto y ncto derecho constitucional, se declara violada en las personas de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Pio Bermejillo, D. Joaquín García Icazbalceta hermanos y D. José T. Guerra, la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitucion general de la República, y en consecuencia, la Justicia de la Union los ampara y protege contra los cobros de las diversas cuotas que se les han impuesto, en virtud de la citada ley de hacienda que motiva este amparo.

Hágase saber; sáquense las copias respectivas para su publicacion, y clévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando, lo decretó y mandó el C. Ignacio Merelo, Juez 2º suplente de Distrito del Estado, firmando con los de asistencia por falta de secretario.

Doy fé.—*Ignacio Merelo*, una rúbrica.—*A. Carlos Orellana*, una rúbrica.—*A. Joaquín Aguilar*, una rúbrica.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Marzo 14 de 1874.—*Ignacio Merelo*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 11 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por el C. Julian Montiel y Duarte, en representacion de los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Pio Ber-

mejillo, D. Joaquín García Icazbalceta Hermanos y D. José T. Guerra, contra la ley de presupuestos expedida el 12 de Octubre de 1873, que el Director de rentas trata de aplicarles. Visto su pedimento, invocando en su favor el artículo 169 de la Constitución federal, y ofreciendo probar la incompetencia de la autoridad que expidió la ley y la de la que la sancionó. Vistos: el informe de la autoridad y su ampliación posterior; el pedimento fiscal; las pruebas rendidas; los alegatos; la sentencia con todo lo demás que de autos consta y tener presente convino.

Considerando, en cuanto á la naturaleza especial de la incompetencia objetada por los quejosos, contra la Legislatura y el Gobernador del Estado de Morelos:

Primero: que la incompetencia por ilegitimidad, ó por falta de todo título legal, que con razón se la llamado *incompetencia absoluta*, debe entenderse comprendida lo mismo que otra cualquiera, en el artículo 169 de la Constitución, puesto que él no hace distinción ni excepción alguna.

Segundo: que admitir tal distinción y excepción desatendiendo á los quejosos, por favorecer la independencia y soberanía de los Estados, que erróneamente se cree atacada, sería sacrificar *los derechos del hombre que son el fin, á la institución que es el medio* (artículo 19 de la Constitución federal.)

Tercero: que la independencia ó la soberanía de los Estados, tal como lo determina la ley fundamental, no es absoluta, sino relativa, limitada y restringida por los artículos 126, 109, 40 y 41 relacionados con otros muchos que no es del caso enumerar.

Cuarto: que por lo dispuesto en esos artículos, los Estados tienen el deber de adoptar para su régimen interior, la forma de gobierno republicano representativo popular, con exclusión de otro cualquiera; de darse una constitución particular que corresponda á ese sistema en lo general, y á las demás prescripciones expresas ó impli-

citas de la Constitución federal, y de observar la Constitución que se hayan dado.

Quinto: que en consecuencia, si la manera con que estaban constituidos la Legislatura y el Gobernador de Morelos, al expedirse y sancionarse la ley de presupuestos, fuese contraria á ese sistema, á esa forma prescrita para su gobierno, tales autoridades deben reputarse ilegítimas é incompetentes, y la Justicia federal, en este caso, tiene que entrar en exámen de sus títulos.

Considerando, en cuanto la manera en que se encontraba constituida la Legislatura de Morelos al expedir la ley de presupuestos.

Primero: que el único vicio que se le objeta, es el de haber integrado su *quorum* el diputado Llamas, que había sido declarado tal, contraviniendo á lo dispuesto en la fracción 4ª artículo 33 de la Constitución del Estado, que prohíbe á los Jefes políticos el poder ser electos diputados por el Distrito en que mandan.

Segundo: que lo dispuesto en esa fracción y artículo, no es de la esencia del gobierno republicano representativo popular, ni está prescrito en la Constitución federal, y lo mismo puede estar ó faltar en la Constitución de Morelos, como está ó falta en las de otros Estados, sin dejar por eso de ser conformes á la federal.

Tercero: que por lo mismo, lo dispuesto en esa fracción y artículo, es un derecho que el Estado de Morelos ha querido establecer para su régimen interior, en virtud de su propia autonomía, y es de su exclusiva responsabilidad el sostenerlo, reformarlo ó derogarlo, sin que los Tribunales de la federación tengan que ver en su aplicación ó cumplimiento.

Cuarto: que por otra parte es de la esencia misma del sistema de Gobierno por intereses de la libertad electoral, el que los colegios electorales superiores califiquen la elección de sus miembros; el que esas calificaciones sean irrevisables, y el que lo así

hecho quede definitivamente legitimado, y así es como hoy debe estimarse la declaración hecha con respecto al diputado Llamas.

Quinto: que en consecuencia ha sido legítima y competente la Legislatura del Estado de Morelos al expedir la ley de presupuestos.

Considerando, en cuanto á la manera con que fué electo el Gobernador que sancionó la ley:

Primero: que el vicio que se le objeta por no haber obtenido los dos tercios de votos del Estado, no es de estimarse por la Justicia federal, por no ser ese derecho de la esencia del sistema, sino propio del Estado, y de su exclusiva responsabilidad.

Segundo: que el segundo vicio que se objeta de haber sido electo en controversia al artículo constitucional que prohíbe la reelección, y sin que tal artículo se hubiera reformado de la manera que la misma Constitución previene, sí es un vicio que afecta á la esencia misma del Gobierno republicano representativo, y al régimen constitucional que la Constitución federal garantiza á los Estados por sus artículos 109 y 41.

Tercero: que está probado bien y cumplidamente, que la reforma del artículo constitucional relativo, no se hizo de la manera que la misma Constitución previene.

Cuarto: que en consecuencia, el Gobernador de Morelos al sancionar la ley de presupuestos, ha obrado como autoridad ilegítima, y por lo mismo incompetente.

Por tales razones y fundamentos, y con apoyo de los artículos constitucionales citados, se decretó: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior, que declaró: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los Sres. D. Ramon Portillo y Gomez, D. Isidoro de la Torre, D. Pío Bermejillo, D. Joaquín García Icazbalceta Hermanos y D. José T. Guerra, contra la ley de Hacienda del Estado expedida en 12 de Octubre de 1873, que el director de rentas de Morelos trata de aplicarles.

Devuélvase las actuaciones al Juez de

TOMO VI.—PARTE II.

Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arleaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Najara.—Ignacio M. Altamirano.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—Enrique Landa, secretario.*

Es copia que certifico.—México, Abril 17 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz, oficial mayor.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por la Sra. D^a Francisca Flores, contra el C. Gobernador del Estado, que le mandó derribar una finca de su propiedad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Jefe de Hacienda del Estado con funciones de Promotor fiscal, dice: que la Sra. Doña Francisca Flores de David considerándose atacada en la garantía individual que otorga nuestro Código fundamental en su artículo 27, para que la propiedad no sea ocupada sino con su consentimiento y previa indemnización de su valor, sin cuyos requisitos dice, el Gobierno del Estado mandó demolerle una casa situada al pie del cerro de San Miguel, á espaldas del teatro que se está construyendo en la plazuela de la "Constancia," por cuyo motivo ocurrió ante V. impetrando el amparo correspondiente de la Justicia federal, apoyada en la fracción 1^a del artículo 19 de la ley de 20